



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	MARÍA ORFELINA VÁSQUEZ SEPÚLVEDA
DEMANDADOS:	WILSON VÉLEZ PIEDRAHITA y ALONSO VÉLEZ PIEDRAHITA
RADICADO:	050013105 021 2012 00339 01
ACTA N°:	74

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral conformada por las Magistradas **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, **LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede pronunciarse en virtud del recurso de APELACIÓN interpuesto por la señora MARÍA ORFELINA VÁSQUEZ SEPÚLVEDA frente a la sentencia con la cual el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia, en el proceso que adelanta en contra de los señores WILSON VÉLEZ PIEDRAHITA y ALONSO VÉLEZ PIEDRAHITA.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 74** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, doctora Ana María Zapata Pérez, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES

##### 1.1. LA DEMANDA<sup>1</sup>

La demandante MARÍA ORFELINA VÁSQUEZ SEPÚLVEDA pretende se condenen a los señores WILSON VÉLEZ PIEDRAHITA y ALONSO VÉLEZ PIEDRAHITA, en forma solidaria al pago de sendos créditos laborales, indemnizaciones y costas, por la relación laboral que manifiesta existió desde el 5 de diciembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012, que el contrato fue verbal, que el cargo desempeñado durante fue de "Empleada de servicio doméstico", que su función era cuidar a una persona de la tercera edad, el salario devengado de \$100.000 semanales hasta el 30 de junio de 2010, \$120.000 semanales hasta el 31 de diciembre de 2010 y \$140.000 semanales en el 2011 y 2012. Que trabajaba de lunes a domingo desde

---

<sup>1</sup> PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 003.

las 7:00 a.m hasta las 7:30 p.m. Que no le hicieron el pago de horas extras, dominicales y festivos, auxilio de transporte, prestaciones sociales tampoco le fueron consignadas a ningún fondo y que no fue afiliada a la seguridad social. Que el contrato terminó porque recibía malos tratos, gritos y ultrajes por parte de sus empleadores, motivo por el cual renunció.

## **2. LAS CONTESTACIONES**

### **2.1. CONTESTACIÓN DE LOS DEMANDADOS<sup>2</sup>.**

El curadora AD LITEM de los demandados indicó que por desconocer a ciencia cierta los supuestos de hecho que dieron lugar a la demanda, carece de elementos para presentar una oposición directa a las pretensiones formuladas, por lo que será la parte actora quien debe probar los supuestos de hechos de las normas que pretende se le aplique.

### **2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA<sup>3</sup>**

En audiencia del **16 de febrero de 2018** el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín toma las siguientes decisiones: ABSUELVE a los demandados de todas las pretensiones formuladas y no condena en costas a la demandante.

Para tomar estas determinaciones razonó de este modo: **i)** La testigo aportada por la demandante no logró acreditar la prestación personal del servicio, desconoce las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como desconoce de quién recibía órdenes, el salario que devengaba. Resalta el juez una contradicción de la testigo con la propia demandante, quien en los hechos de la demanda señala que no le pagaban auxilio de transporte, mientras la testigo dijo que si le pagaban dicho subsidio. Afirma el a quo que los pocos hechos que conocía la testigo habían sido contados por la pretensora. **ii)** Al revisar el material documental no se encuentra prueba alguna con la que se pueda concluir la existencia del contrato laboral, ni que se haya podido demostrar si quiera la prestación personal del servicio.

### **3. EL RECURSO DE APELACIÓN.**

Si bien en el presente proceso no se logró probar la relación laboral, no existe constancia de que los empleadores hubiesen efectuado algún pago de prestaciones sociales a su poderdante, adicional a esto se aduce la mala fe de los empleadores por el hecho de no haber asistido a la audiencia.

<sup>2</sup> PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 18 páginas 1 a 5 y 13 a 17.

<sup>3</sup> PRIMERA INSTANCIA - ARCHIVO 020.

#### 4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>4</sup>, ninguna de las partes hizo uso de tal oportunidad.

Pues bien, el a quo profirió una **DECISIÓN ABSOLUTORIA** y la competencia de la Sala está dada en virtud del **RECURSO DE APELACIÓN** establecido en el **artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social**, en la medida de que la parte demandante interpuso el mismo en audiencia por encontrarse inconforme con la decisión. Los problemas jurídicos a resolver serán: **i)** En primer lugar, se analizará lo relativo a la exigencia de demostrar la prestación personal del servicio para la configuración del contrato de trabajo; para luego, **ii)** Descender al caso concreto y verificar si resulta acorde a derecho y a lo acreditado en el proceso, la valoración y decisión absoluta adoptada en primera instancia.

#### 5. LA EXIGENCIA DE DEMOSTRAR LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Se dispone en los **artículos 22 y 23 del CST**, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren tres elementos esenciales: **i)** La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; **ii)** La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y, **iii)** Un salario como remuneración. Una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo 23, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.

De acuerdo con las reglas de la carga de la prueba contenidas en el artículo 167 del actual Código General del Proceso, antes 177 del Código de Procedimiento Civil – aplicable a las causas judiciales del trabajo y de la seguridad social, acorde con lo dispone el artículo 145 del estatuto de la materia-, las partes deben “*probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen*”.

<sup>4</sup> SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 04.

Así, es principio universal en cuestión de la carga probatoria, que *“quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado”* (**Sentencia CSJ SL 21779, 22 abril 2004**).

En efecto, desde la sentencia C-070 de 1993 la Corte Constitucional ha señalado que, en las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al juez con su propia versión de los hechos. De esa manera, cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado respecto de las excepciones.

En síntesis, esta institución de las cargas probatorias pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, ***“las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes”***, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia **T-733 de 2013**.

Y en respecto a las cargas probatorias, de manera concreta y **en relación con la configuración del contrato de trabajo**, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado desde antaño<sup>5</sup> que, para su declaración, se requiere que esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor del demandado. Ya en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral, no es menester su acreditación cuando la prestación del servicio se hace manifiesta, pues en tal evento, lo pertinente es hacer uso de la prerrogativa legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, según el cual, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Así, al demandante le basta con probar en el curso de la *litis* su actividad personal, para que se presuma en su favor el vínculo laboral; y siendo ésta demostrada, es al empleador, a quien le corresponde desvirtuar la presunción, evidenciando que la

<sup>5</sup>SL 2536 – del 4 de julio de 2018

relación fue independiente y no subordinada.

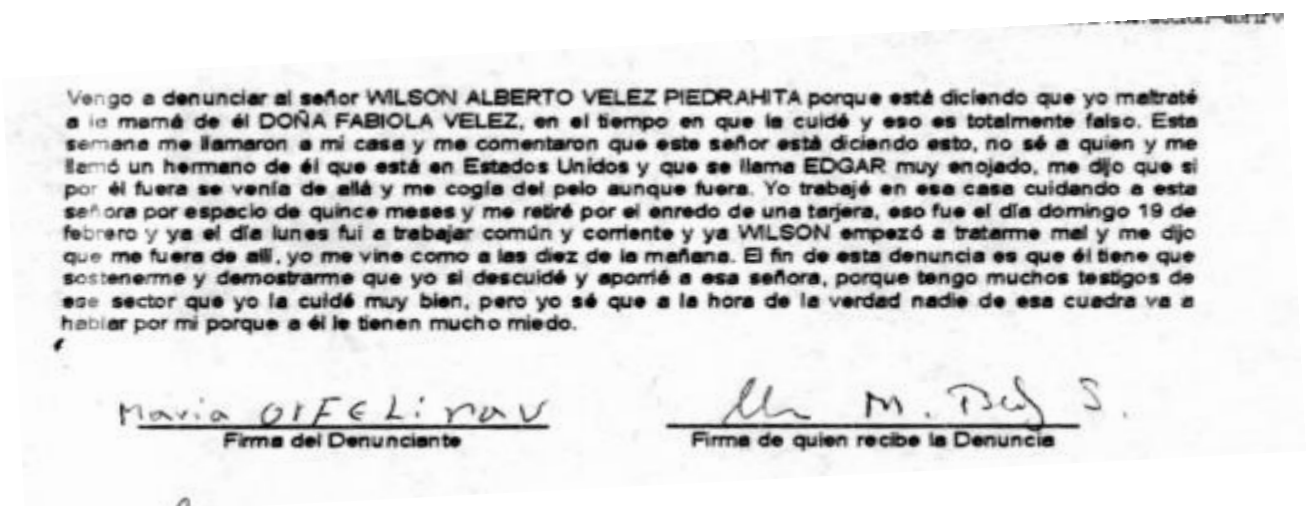
Pues bien, a partir del elenco normativo y la jurisprudencia previamente relacionada, se efectúa el análisis en el caso concreto señalando que, de acuerdo con los ANTECEDENTES de esta providencia, se sabe que el Juez concluyó que MARÍA ORFELINA VASQUEZ SEPULVEDA no estuvo vinculada laboralmente con los demandados, absolviendo así de todas las pretensiones.

Es contra decisión que la parte actora manifiesta que, si bien no se logró probar la relación laboral, no existe constancia de que los empleadores hubiesen efectuado el pago de las prestaciones sociales a la actora y aduce a la mala fe de los señores WILSON VÉLEZ PIEDRAHITA y ALONSO VÉLEZ PIEDRAHITA por no haber asistido a la audiencia pública.

Le correspondía a la parte actora acreditar las afirmaciones contenidas en la demanda, referidas de manera concreta a lo siguiente: **i)** Que prestó el servicio personal subordinado bajo las órdenes de los señores WILSON VELEZ PIEDRAHITA y ALONSO VELEZ PIEDRAHITA entre el **05 de diciembre de 2010** y el **29 de febrero de 2012**. **ii)** Que desempeñó el oficio de servicio doméstico. **iii)** Que la terminación del contrato obedeció a una renuncia motivada.

Para probar las afirmaciones de la demanda, la activa adosa al proceso:

- Documento FISCALIA GENERAL DE LA NACION – FORMATO ÚNICO DE NOTIFICA CRIMINAL, por medio de la cual, la señora MARÍA ORFELINA denunció al señor WILSON ALBERTO<sup>6</sup>.



- Documento FISCALIA GENERAL DE LA NACION – FORMATO ÚNICO DE NOTIFICA CRIMINAL, por medio de la cual el señor LUIS ANIBAL denunció al señor WILSON y EDGAR

<sup>6</sup>PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Página 7 a 13

PIEDRAHITA VELEZ por la misma situación de la que puso en conocimiento de las autoridades la señora MARÍA ORFELINA<sup>7</sup>.

De otro lado, se verifica que en la audiencia pública celebrada el **16 de febrero de 2018** se recibió la declaración de la testigo **CLAUDIA GILMA BRAVO** quien manifestó frente a la situación que ocupa la atención de la Sala:

"Yo le ayudé a conseguir el trabajo, era de oficios domésticos, yo vi el aviso pegado en la calle y le informé a Orfelina para que se postulara al empleo. A ella le dieron el empleo en la parte de Guayabal. **Sinceramente yo no conocí a los patrones de ella, solo le di la información del trabajo. Sé que trabajó en Guayabal porque ella me contó, pero no tengo ni el teléfono ni la dirección porque nunca entré a esa casa.** Ella trabajaba desde las 7 de la mañana, pero no tenía hora fija de salida, **lo sé porque ella me comentó. No sé de quién recibía órdenes. No sé si tenía que usar uniforme, pero supongo que como tenía que hacer oficios domésticos debían entregarle dotación.** No recuerdo bien de qué fecha a qué fecha entró ella a trabajar, yo le coloqué un promedio a esta fecha hace seis años. Si le pagaban auxilio de transporte era poco, si se lo pagaban porque ella me comentó, pero no me dijo cuánto era el monto. No supe porque se terminó el trabajo, **ella me comentó** que estaba sin trabajo y que no sabía que había pasado porque no la volvieron a llamar. Ella nunca me habló de prestaciones sociales. Vine a saber hace poquito que ella había demandado al señor Wilson. No sé si a ella le pagaron Cesantías o si le fueron consignadas a algún fondo. Nunca me dijo si le pagaban ARL."

Por su parte, en el interrogatorio de parte, la actora manifestó:

"Me contactó el señor Alonso Vélez. A mí me pagaba Wilson, las instrucciones me las daba Wilson. No firmé ningún contrato. Inicié a trabajar el 5 de diciembre de 2010 hasta el 29 de febrero de 2012. Trabajaba en el barrio Guayabal, cerca al parque de Cristo Rey a 4 cuadras. El señor Alonso fue el que me contrató y el encargado de la casa era Wilson. El señor Alonso nunca me pagó. Yo siempre trabajé en la casa de la mamá de ellos. Las instrucciones que Wilson me daba era que estuviera pendiente de la droga de la mamá, de las comidas y sacarla a caminar. El valor del salario me lo dijo el señor Wilson, me pagaban 100.000, luego me subía a 120.000 y a lo último 250.000, era mensual. Me pagaban los primeros de cada mes. No tenía EPS ni nada, no me pagaron vacaciones".

En criterio de esta corporación, la versión ofrecida por la demandante no tiene ningún sustento probatorio, con relación a los documentos se trata de una denuncia que hace la propia parte y al parecer su cónyuge, pero de allí no se puede concluir la prestación personal del servicio a favor de los demandados. Con relación al testimonio de la señora CLAUDIA GILMA BRAVO no aporta elementos de convicción para lo que pretende la parte actora, en tanto no le consta la prestación del servicio de manera personal y directa de la demandante, todo lo que sabe se debe a comentarios de la propia demandante.

El valor persuasivo de un testimonio pende de la forma cómo el declarante llegó al conocimiento de los hechos que relata, dado que como no es lo mismo percibirlo que escucharlo, los testigos de oídas poca credibilidad tienen, pues aparte de que ello dificultaría el principio de contradicción de la prueba considerando que quien habla

<sup>7</sup>PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Página 7 a 13



simplemente reproduce la voz de otro, en ese caso, como es natural entenderlo, las probabilidades de equivocación o de mentira son mucho mayores (**CSJ SC, 22 mar. 2011, rad. 21334**).

Así las cosas, atendiendo a lo dispuesto en el **artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social**, se CONFIRMARÁ la providencia que se revisa porque al no haberse demostrado siquiera la actividad personal de la actora a favor de los señores WILSON VÉLEZ PIEDRAHITA y ALONSO VÉLEZ PIEDRAHITA, es claro que tampoco resulta pertinente hacer uso de la prerrogativa legal prevista en el **artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo** modificado por el **artículo 2º de la Ley 50 de 1990**.

Finalmente, y en relación con las COSTAS, debe indicarse que en esta instancia no se causaron – artículo 365 CGP numeral 8.

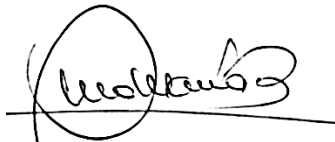
## 6. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**:

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia. **SIN COSTAS** en esta instancia.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 021 2012 00339 01

SENTENCIA del //14/09/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/ErG2FXD3ldBHUX91WLe5GFgBT7gdIp\\_sFKs7XQPC\\_glivA?e=2djNUI](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/ErG2FXD3ldBHUX91WLe5GFgBT7gdIp_sFKs7XQPC_glivA?e=2djNUI)